



VOL: AÑO 4, NUMERO 11

FECHA: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 1989

TEMA: TRANSICION Y DEMOCRACIA EN MEXICO: El sistema político hacia fin de siglo

TITULO: **Partidos políticos y transición a la democracia en México**

AUTOR: *Luis Salazar* [*]

SECCION: Artículos

EPIGRAFE:

Para la Polémica E.P.

"Donde quiera que existen partidos políticos, cada uno de ellos encuentra la razón de todo mal en el hecho de que no sea él, sino su contrincante, el que empuña el timón del Estado".

K. Marx

RESUMEN:

Este ensayo intenta considerar algunos rasgos relevantes de las principales organizaciones partidarias en México, en la perspectiva de una posible transición a la democracia. La hipótesis central es que dicha transición no puede ser más que un proceso a mediano plazo, que supone una profunda reforma del Estado mexicano y cuya evolución dependerá en gran medida de la capacidad de los grupos políticos analizados para acordar una serie de rupturas concertadas. Por ello mismo, el trabajo busca destacar los obstáculos presentes en los partidos fundamentales (PRI, PAN, PRD), en la idea de que las posiciones simplistas difícilmente pueden coadyuvar a la democratización del país.

TEXTO

1. Un régimen político democrático implica al menos las siguientes condiciones: Estado de derecho, división de poderes, sistema competitivo de partidos y autonomía de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil. La ausencia de una o varias de estas condiciones nos habla de rasgos autoritarios en un sistema político que pueden hacer falaces o nulos los procesos de legitimación electoral de los poderes públicos. Así, la no sujeción a la legalidad establecida da lugar a poderes discrecionales que con toda impunidad manipulan o pervierten los resultados electorales; la inexistencia práctica de una división y equilibrio entre los poderes del Estado, configura una situación de concentración de las decisiones que, inevitablemente, hace precarios los derechos políticos de la ciudadanía; por su parte, la ausencia de partidos realmente capaces de competir en igualdad relativa de condiciones, convierte a las votaciones en meros trámites burocráticos o plebiscitarios sin incidencia real en la política gubernamental; finalmente, la no autonomía de la sociedad civil, de sus instituciones y organizaciones, supone el predominio de relaciones autocráticas que convierten en súbditos efectivos a los presuntos ciudadanos, haciendo nulos los derechos políticos individuales.

La sola enumeración de estas condiciones revela la distancia que separa al Estado mexicano actual de una democracia política efectiva. En México es más que precaria la sujeción de los poderes públicos a las normas jurídicas; existe una subordinación radical de las Cámaras legislativas y del Poder judicial al Ejecutivo federal; existe un partido del gobierno que vuelve brutalmente desigual la competencia electoral; y, además, buena parte de las organizaciones de la sociedad civil se encuentra sometida abierta o veladamente al gobierno o a su partido. Ello no significa, como ciertas estridencias opositoras pretenden, que se trata de una dictadura ni mucho menos de un régimen totalitario, pero sí que el régimen mexicano sigue siendo fundamentalmente autoritario, en tanto predominan relaciones verticales, incluso autocráticas de poder.

Habría que reconocer, sin embargo, que a partir de 1970 el país ha vivido un lento y contradictorio proceso de democratización gradual, de ampliación de espacios democráticos y de relativa modificación progresiva de sus rasgos más autoritarios. A pesar de las recientes revelaciones acerca de la corrupción imperante en los cuerpos policíacos y de seguridad nacional, parece indiscutible la tendencia a cuidar cada vez más el respeto por las formas legales. Es igualmente evidente que, con todos sus defectos, las Cámaras del Poder legislativo juegan un papel mucho más importante políticamente que en el pasado. Las sucesivas reformas electorales, por su lado, han permitido no sólo el registro de nuevos partidos, sino también una mayor competitividad de los mismos en el terreno electoral. Y finalmente (aunque no al final), han surgido nuevas organizaciones y movimientos sociales capaces no sólo de sobrevivir sino de crecer y fortalecerse reivindicando su independencia del partido oficial.

Paradójicamente este lento y difícil proceso de democratización se ha desarrollado al calor de una crisis económica cada vez más aguda. Incluso es posible decir que, al menos en parte, son las consecuencias de esta crisis las que han promovido, este proceso. Ante una situación que había hecho prácticamente imposible la continuación de las políticas clientelistas tradicionales, así como la posibilidad de legitimarse mediante sus logros económicos, los grupos gobernantes asumieron la necesidad de abrir canales institucionales para la expresión del descontento, intercambiando, por así decirlo, derechos políticos por deterioros económicos. La sorpresa electoral de 1988, sin embargo, parece haber mostrado un punto de inflexión en este intercambio.

En efecto, después de más de siglo y medio de vida independiente en el que la preocupación por el sufragio efectivo fue asunto más o menos central de grupos sociales y políticos muy restringidos -y que Madero nos perdone-, el 6 de julio mostró por vez primera la emergencia de una plural ciudadanía de masas que reivindicaba y asumía sus derechos políticos. No habría que exagerar los alcances de ese fenómeno o su posible solidez, pero es claro que se ha modificado radicalmente la atmósfera política del país, haciendo de los procesos electorales -y salvo regresión autoritaria no enteramente descartable- el eje de la transformación inevitable de nuestro sistema político. Aun si las tasas de abstencionismo muestran el carácter parcial y hasta precario de la nueva cultura política, cabe afirmar que el 6 de julio marca un punto de no retorno para la historia de México. Los reclamos democráticos podrán sin duda ser golpeados, reprimidos, incluso masacrados, pero el país ya no podrá ser gobernado sin reconocerlos.

Se puede pensar, entonces, que estamos ante una aceleración del proceso democratizador impulsada por amplios sectores de la población. Sería sin embargo ingenuo no asumir las enormes dificultades a las que este proceso se enfrenta. Como tantas veces indicara Pereyra, lo que está en juego es mucho más que un juego electoral limpio, en la medida en que la estructura misma del Estado mexicano hace impensable el gobierno de otro partido que no sea el PRI. En otras palabras, la constitución de un verdadero sistema competitivo de partidos pasa necesariamente por la reforma del

Estado, de las instituciones y funciones públicas. Pero pasa también por una modificación radical de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, y por consecuencia, de las propias redes organizacionales de esta última. Es por ello que sólo el peor de los simplismos puede imaginar un tránsito inmediato, sin dificultades, a la democracia en México. Por importante que pueda ser, por ejemplo, la experiencia española, no habría que olvidar las enormes diferencias existentes entre un régimen de excepción "unipersonal" como el franquista, y un régimen institucional "unipartidista" como el mexicano: en nuestro caso, la muerte de uno u otro personaje puede quizá afectar el proceso, pero nunca como en el caso de la muerte de Franco. Por ello el itinerario real de nuestro proceso no puede ser sino complejo, contradictorio y hasta heterogéneo, dadas las dificultades que enfrenta.

De esta forma, los comicios recientemente efectuados en cinco entidades del país son una clara expresión de las profundas desigualdades no sólo sociales sino también políticas de nuestra nación. Aun si son alentadores los avances de las fuerzas de oposición en Baja California y en Michoacán, no dejan de ser preocupantes los síntomas de profundo desinterés presentes en Campeche, Zacatecas e incluso Chihuahua. Por otra parte, los ominosos ruidos subterráneos que han acompañado el reconocimiento de la victoria panista en Baja California, revelan el arraigo impresionante de una cultura abiertamente antidemocrática en las filas del priísmo nacional y regional. Y ello sin considerar la pertinacia con que fuerzas locales y federales acuden a todo tipo de trampas, presiones y amenazas con tal de mantener su monopolio político. Mal que nos pese, el autoritarismo priísta, aunque herido, conserva recursos y fuerza suficiente para obstaculizar e incluso revertir los avances democráticos. Ello parece probarse en Michoacán, donde no obstante su precariedad organizativa, el PRD de Cárdenas obtuvo cierto éxito electoral sólo para encontrarse con la obstinación fraudulenta e incluso provocadora de la Comisión Electoral Estatal.

En este claroscuro en el que junto a avances indiscutibles reaparecen acentuados los rasgos más irritantes de prepotencia y autoritarismo, la hipótesis (por así llamarla) de que todo depende ya sea de la voluntad del presidente, ya sea de la presión popular, resulta por lo menos ridículamente simplista. Lejos de ello, los acontecimientos recientes no parecen obedecer a un plan preconcebido o a una línea maquiavélica del gobierno. Aun si es posible reconocer en algunos momentos el peso del Ejecutivo Federal, debiera ser claro que éste no es ni puede ser decisivo en todos los casos. Pesan también las correlaciones de fuerzas regionales, intra y extra priístas, así como la capacidad organizativa y política de los partidos de oposición. Por ello, es necesario no sólo denunciar los fraudes y exigir transparencia electoral, sino también entender las condiciones que lo hacen viable e incluso inevitable. Pues, en fin de cuentas, no habría que olvidar que las actitudes meramente contestatarias y moralistas conducen, tarde o temprano, a transmutar la indignación en aburrimiento y el entusiasmo en resignación pasiva.

Ahora bien, contrariamente a ciertos comentaristas y voceros partidistas, nuestra premisa es que la crisis económica no ha provocado en México una crisis política en sentido propio, aunque sí un deterioro crítico de la hegemonía priísta tradicional. Conviene hacer dicha distinción por cuanto no habría que confundir el enorme desprestigio social acumulado por el aparato priísta y la consecuente crisis de credibilidad en los procesos electorales, con una presunta crisis de ingobernabilidad (y muchos menos una crisis revolucionaria) del Estado mexicano. Lo más que podría decirse, en todo caso, es que sí la decaída legitimidad revolucionaria del régimen no es sustituida progresivamente por una nueva legitimidad democrática y plural, entonces no es improbable una verdadera crisis política que, por lo demás, lejos de coadyuvar o acelerar la transición democrática, más bien pondría en grave riesgo sus posibilidades efectivas.

Por estas razones vale la pena preguntarse por la situación de nuestro peculiar sistema de partidos, así como por las perspectivas probables de su evolución futura. Pues en buena medida las expectativas suscitadas por el naciente interés social en los comicios dependerán de la construcción de partidos políticos con real capacidad de establecer vínculos democráticos entre el Estado y la sociedad civil.

2. La clave de todo el sistema político mexicano, de su impresionante estabilidad pero también de su actual deterioro, es sin duda el partido oficial y sus oscuras y confusas relaciones con el gobierno y el Estado en su conjunto. Mucho se ha discutido acerca de la naturaleza del PRI, ya se le defina como partido de Estado -acercándolo a los Partidos Comunistas del socialismo real-, o bien como partido del gobierno -subrayando su dependencia respecto de los grupos gobernantes y en particular del titular del Ejecutivo-, o bien como "partido hegemónico pragmático" -destacando su carencia de una ideología precisa y su función instrumental. Lo cierto es que este aparato es menos y más que un partido político propiamente dicho.

Menos por cuanto carece de la independencia y autonomía que le permitirían jugar el papel de un partido político en el sentido tradicional del término, esto es, de una representación organizada de determinados intereses y concepciones sociales. Ello no excluye que en su interior se desarrollen todo tipo de transacciones, negociaciones y luchas sectoriales y políticas; pero tales procesos -generalmente ocultos y hasta clandestinos- se encuentran subordinados a una disciplina cuya regla de oro es que, en cualquier caso, la última palabra la tiene el jefe del Ejecutivo. Esto determina relaciones burocráticas y verticales de poder descendente que a su vez explican el carácter "cortesano" de las actitudes priístas ante la autoridad, donde importa poco lo que se piense o los principios que se sostengan en la medida en que lo relevante es quedar bien con los superiores. Así, los conflictos sólo pueden desarrollarse en forma soterrada, indirecta, en un juego en el que son siempre las reglas no escritas las que predominan sobre las normas escritas. La propia existencia de sectores y grupos asemeja más a organizaciones secretas, muchas veces mafiosas, que a las tendencias y agrupaciones característicos de la mayor parte de los partidos políticos propiamente dichos. No en balde es posible afirmar que la disciplina ante el poder presidencial -y sus derivados verticales- es uno de los valores supremos del priísmo como subcultura política. Y por contra, que la iniciativa y la independencia sean considerados no sólo con sospecha sino con abierta hostilidad, dando lugar a un sistema de lealtades más o menos personalizadas que tienden a prescindir casi totalmente de cuestiones de principios. De ahí que sea frecuentemente difícil, si no imposible, saber qué es lo que realmente piensan políticamente los priístas, así como el uso inmoderado de una fraseología hueca cuyo mayor mérito es la elusión de cualquier compromiso preciso.

Es claro que el mantenimiento de una disciplina tal se explica no en términos de una serie de convicciones ideológicas compartidas -caso de los viejos partidos comunistas en la oposición- sino en términos pragmáticos y utilitarios: tarde o temprano, el premio por la lealtad será la ocupación de cargos públicos más o menos importantes y más o menos gratificantes en sentido económico. En otras palabras, el cemento de la cohesión impresionante del aparato priísta ha sido hasta ahora, fundamentalmente, el poder; o mejor, el monopolio sobre los cargos públicos. Lo que, evidentemente, está ligado a la más que frecuente utilización patrimonialista de los recursos estatales. La corrupción es por ello algo más que una cuestión moral, es el costo inevitable de un sistema no plutocrático que mantiene su disciplina y su cohesión convirtiendo los cargos públicos en premios a la lealtad política. La carrera política, en todos sus niveles, ha sido siempre en México -con excepciones sin duda- más un método de enriquecimiento personal, que un modo de afirmar una vocación de liderazgo político.

Ahora bien, este uso patrimonial de los recursos públicos no es tanto un problema por la cantidad de ellos que es apropiada individualmente -por la corrupción en sentido estricto-, cuanto por la irracionalidad que impone en su asignación. En efecto, dadas las enormes cuotas de discrecionalidad de que goza la burocracia política en el empleo de dichos recursos, se genera inevitablemente una serie de efectos perversos en los procesos de implementación de las políticas públicas, que más allá de las intenciones del grupo gobernante determinan un despilfarro mayúsculo así como una ineficacia asombrosa de las instituciones. Entre las decisiones y planes gubernamentales y su realización el priísmo interpone un intrincado tejido de negociaciones, presiones y transacciones burocráticas y cortesanas que hacen prácticamente irreconocibles sus resultados. La mezquina subpolítica clandestina domina, de esta forma, el funcionamiento real de la mayoría de las instituciones públicas -desde las secretarías hasta hospitales y escuelas públicas, pasando por las empresas paraestatales- convirtiéndolas en botín más o menos codiciado de grupos de presión que no en pocas ocasiones pervierten radicalmente su sentido. Los temores weberianos de una política que asume tintes económicos, y de una economía que adquiere rasgos políticos, encuentran en el sistema priísta un ejemplo paradigmático.

Pero el PRI es también mucho más que un partido político. Es propiamente un aparato de hegemonía política sobre la sociedad civil, que ha logrado subsumir y controlar (y en momentos, hasta representar) a los sectores populares fundamentales de nuestro país. El corporativismo estatal mexicano, en efecto, tiene en el partido oficial su pieza maestra. Encuadradas en él durante el auge del reformismo nacional revolucionario de Cárdenas, las más importantes organizaciones obreras y campesinas han constituido uno de los pilares fundamentales de la estabilidad y legitimidad de los gobiernos priístas. Pero, por la propia lógica antes mencionada del PRI, tal encuadramiento ha supuesto subordinación casi incondicional, así como su conversión en grupos de presión, transacción y compromisos semiclandestinos, que tienden a depender más de las autoridades en turno que del apoyo de sus supuestos agremiados. No por nada es en este subsistema donde han arraigado más los reflejos autoritarios y clientelares que ven en toda apertura democrática un peligro para sus privilegios corporativos.

Sustentados en una mecánica que promueve el consenso pasivo y un clientelismo apoyado en las profundas desigualdades económicas y en las carencias absolutas de una buena parte de la población, las burocracias de las organizaciones populares reproducen en la sociedad civil un modo de hacer política cortesano y personalizado, que sólo puede provocar desconfianza y escepticismo ante la política y ante los políticos. Por mucho tiempo, los frutos del crecimiento económico permitieron un funcionamiento más o menos "normal" de esta mecánica, en la medida en que las clientelas populares lograban el acceso cierto tipo de bienes a cambio de su disciplina y su lealtad. Al reducirse sin embargo de manera radical el flujo de recursos, no pudo sino incrementarse la hostilidad ante un sistema que no sólo anula prácticamente las posibilidades de incitativa y participación en las decisiones, sino que también atenta contra los valores más elementales de la civilidad contemporánea.

Ahora bien, ¿cuáles son las posibilidades de una transformación del PRI en un partido político propiamente dicho? Al propio gobierno actual parece convenirle un distanciamiento en relación a "su" partido, en la medida en que éste (o al menos algunos de sus sectores) lo desacredita fuertemente ante amplias capas de la población. Y buena parte de los golpes espectaculares del régimen salinista ha recaído sobre elementos clave del priísmo tradicional. Sin embargo, lo que ya no parece tan claro es en qué medida el propio gobierno puede prescindir del inmenso aparato priísta -sin tener nada que pueda sustituirlo- y en qué medida incluso puede abandonarlo a sus propias fuerzas. Los últimos

acontecimientos pueden interpretarse como efectos de una política cautelosa que pretende dosificar, por así decirlo, los avances democráticos de tal manera que se evite a la vez una serie de desastres electorales priístas o una rebelión en sus filas, y la permanencia de las viejas tradiciones de "carro completo". De una política digamos "realista", que no dejará de utilizar los más arcaicos instrumentos en tanto se lo permitan las correlaciones fuerza, pero que reconocerá, al mismo tiempo, que la situación exige preparar al partido oficial para que este sea más competitivo electoralmente. En este sentido la posible metamorfosis priísta dependerá básicamente de dos cosas: de la capacidad de sus sectores más autoritarios y retrógrados para chantajear políticamente al gobierno; y de la capacidad de los partidos de oposición y de la ciudadanía activa para imponer reglas y modalidades transparentes en los comicios que le hagan sumamente costosos los fraudes al gobierno. No se niega que al interior del PRI existen elementos convencidos de la necesidad de convertirlo en un verdadero partido político. Pero, a nuestro parecer, su peso real estará condicionado por los factores antes señalados.

3. La existencia misma del partido oficial ha condicionado profundamente el surgimiento, la evolución y aun la naturaleza de los partidos de oposición en México. De hecho, como el PRI, las organizaciones políticas reconocidas antes de la Reforma Política de 1977, se configuraron a partir de desprendimientos de la clase política posrevolucionaria, reivindicando algún aspecto de la Revolución Mexicana presuntamente traicionado o soslayado por los grupos gobernantes. Sin embargo, a pesar de su colaboración en la organización del Banco de México, el fundador del Partido de Acción Nacional, Manuel Gómez Morín, imprimió desde siempre un carácter realmente independiente a este organismo político, oponiéndolo tajantemente a la esencia misma -corporativa y autoritaria- del partido oficial. Ello no puede decirse en cambio ni del Partido Popular Socialista ni, menos aún, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Aun si en sus comienzos como Partido Popular el PPS intentó captar el voto obrero y campesino con una alternativa independiente, pronto hubo de recurrir a la beneficencia estatal a cambio de un apoyo prácticamente incondicional a los diversos gobiernos.

La pervivencia del oposicionismo independiente del PAN se explica, por su parte, por el hecho de que su clientela electoral -que habría de crecer con la modernización del país- se localizó generalmente fuera de los marcos corporativos priístas, aun a pesar de las defecciones empresariales que sufrió en sus comienzos. Organizado en un primer momento como partido de notables, con influencia en sectores conservadores tradicionales y más o menos liberales, su mayor éxito fue capitalizar los descontentos regionales provocados por el autoritarismo y el patrimonialismo oficiales. De ahí el sesgo moralizante de sus interpelaciones, así como su continua propensión al abstencionismo como forma de protesta ante las arbitrariedades electorales de los gobiernos. De alguna manera, los dirigentes originales de Acción Nacional reconocían su debilidad política aduciendo la necesidad de una larga labor educativa, casi apostólica, que tarde o temprano llevaría a la generalización de un espíritu cívico en el pueblo mexicano.

En este sentido podía justificarse que lo importante no era ganar sino competir, en la espera de que la sociedad mexicana reconociera la necesidad de participar en los comicios y pusiera fin a los métodos populistas y antidemocráticos del partido oficial. Sin llegar nunca al clericalismo, pero aprovechando los excesos jacobinos de los gobiernos posrevolucionarios, el panismo reivindicó tanto la revisión del artículo 3o. constitucional, como los derechos políticos para los sacerdotes, lo que si bien le atrajo las simpatías de franjas conservadoras y católicas, también facilitó al oficialismo su descalificación como sucesores de los conservadores mexicanos del siglo pasado. Empero, habría que reconocer como un mérito indiscutible de este partido el haber persistido en un cierto maderismo, esto es, en la defensa de los procesos electorales como vía para la acción

política a pesar no sólo de la prepotencia gubernamental y del izquierdismo rampante de las organizaciones socialistas, sino también de la indiferencia popular.

Fue la crisis de 1976, sin embargo, la que haría pasar al PAN de la oposición moral a la oposición real. Aun si puede sostenerse que obtuvo triunfos electorales importantes en ciertos estados antes de esa fecha -Yucatán, Baja California, etc.-, lo cierto es que nunca tuvo ni la fuerza ni la convicción necesarias para hacerlos valer políticamente frente al gobierno. Una cierta resignación fatalista, pero también una concepción puramente moral de la política, parecían siempre paralizar su capacidad para hacer política más allá de los períodos electorales y de la mera petición del voto ciudadano. De esta forma, al toparse con el descontento creciente de sectores empresariales y medios que le exigía posturas más radicales y combativas, el PAN sufrió un verdadero ataque de esquizofrenia política que culminó en su incapacidad para proponer un candidato presidencial y en una escisión de cuadros tradicionales importantes. Muchos observadores pensaron inclusive que había sonado la última hora del panismo en México. La propia Reforma Política se pensó por ello teniendo en mente el ascenso de la izquierda organizada, pero también la necesidad de renovar lo que parecía entonces una oposición leal totalmente desacreditada.

Pero lejos de tratarse de una crisis de agonía se asistió más bien a una verdadera crisis de crecimiento y renovación del panismo. Conquistada la hegemonía por un nuevo grupo pragmático y combativo -el célebre neopanismo-, éste se dio a la tarea de abrir las puertas del partido a nuevos "cuadros", salidos del descontento empresarial pero también de sectores medios reactivados políticamente por la crisis. El desastroso final del sexenio Lópezportillista, pero también el auge imprevisto del neoliberalismo y el neoconservadurismo a nivel internacional, habrían de crear las condiciones ideales para un avance impresionante, electoral y político, del Partido Acción Nacional. En buena parte de los estados del norte de la República, el panismo se configuraría ya no sólo como oposición moral y real a un régimen visto como responsable de la crisis y la corrupción, sino también -y esto es decisivo- como oposición con capacidad efectiva de derrotar electoralmente al partido oficial. Recurriendo a métodos y tácticas desacostumbradas por su radicalismo y por su naturaleza movilizadora, el PAN habría de poner en jaque una y otra vez al sistema, haciéndole perder crédito y legitimidad tanto a nivel nacional como internacional.

La campaña electoral de 1988 y sus secuelas habrían de poner a prueba todos estos avances panistas. Su candidato presidencial, un reconocido empresario político, Manuel J. Clouthier, intentaría mostrar que los triunfos reconocidos y no reconocidos permitían esperar una competencia real por la presidencia de la República. Tan optimistas expectativas serían sin duda sacudidas por la emergencia de un inesperado polo opositor encarnado en la figura mítica de Cuauhtémoc Cárdenas, lo que no dejaría de provocar tensiones y confusiones dentro del PAN después de los comicios. A pesar de todo, este organismo saldría bien librado del examen. Aprovechando el desconcierto y la precariedad organizativa del Frente Democrático Nacional, así como el susto y la confusión dentro de las filas priístas, Acción Nacional después de un breve lapso de descalificación de los resultados electorales, pasaría a una política madura de consolidación de fuerzas y negociación con el nuevo régimen que lo habría de llevar, en corto tiempo, a la conquista de la gubernatura de Baja California, el triunfo electoral más importante que haya alcanzado un partido de oposición en el México posrevolucionario.

Pero más allá de este hecho -que en otras condiciones podría ser puramente anecdótico- el PAN parece haberse configurado como un verdadero partido político, capaz de expresar y representar políticamente a sectores importantes de la población -aunque desigualmente distribuidos en el conjunto del país. Capaz, también, de formar, organizar y reclutar cuadros políticos heterogéneos pero reconocidos y reconocibles por sus

electores. Capaz, igualmente, de organizar campañas electorales modernas eficaces, y de movilizar a sus bases para defender sus votos. Pero sobre todo, capaz de sintonizar con los elementos de una sociedad civil modernizada, relativamente desinformada pero cada vez más sensible a determinado tipo de mensajes políticos. Es cierto que la fuerza política panista sigue siendo regional y sumamente desigual; es cierto asimismo que su discurso político peca no sólo de vaguedad e imprecisión programática sino también de insensibilidad para con los agudos problemas económicos de demasiados mexicanos; es cierto finalmente que en ocasiones su nuevo pragmatismo parece implicar dosis relativamente altas de cierto oportunismo cínico a la hora de hacer públicos los resultados electorales que no le favorecen; pero todo ello no anula que, hoy por hoy, el PAN es lo que más se acerca en México a un partido político propiamente dicho.

4. En el otro lado del espectro político, las cosas aparecen mucho más complicadas. La escisión de la Corriente Democrática y el surgimiento de una figura política popular como la de Cuauhtémoc Cárdenas habría de servir para que una serie de partidos en proceso de extinción -PPS, PFCRN Y PARM- se convirtieran, en la modalidad de Frente Democrático Nacional, en la segunda fuerza electoral de acuerdo a los resultados oficiales de los comicios de 1988. El recientemente conformado PMS, en cambio, sufrió las consecuencias de su incapacidad para ajustar su política ante la nueva situación generada por aquella escisión, pasando a ocupar el último lugar electoral entre los partidos que no perdieron su registro. El huracán (neo)cardenista, en efecto, habría de poner todo boca arriba, elevando membretes partidarios desacreditados y hasta corruptos (caso de ferrocarril) y hundiendo los titubeantes esfuerzos de la izquierda democrática independiente aglutinada en el Partido Mexicano Socialista (hoy ya difunto).

Dejando de lado al PPS, al PFCRN y al PARM, dado que su destino al parecer es seguir siendo satélites políticos que sólo sirven para complicar y confundir los procesos electorales, cabe preguntarse por la evolución y la situación actual de la izquierda mexicana hoy parcialmente integrada en el flamante Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué ha pasado con esa izquierda que en 1978 prometía tanto y que, a más de diez años de distancia, parece haber cumplido muy poco?

La Reforma Política y el posterior registro primero del PCM y después del PMT y el PRT, así como los diversos ensayos de fusión orgánica (PSUM, PMS), dieron lugar a un difícil tránsito de la izquierda mexicana independiente, que de una identidad "revolucionaria" (y más propiamente, doctrinaria) hubo de pasar de una hasta ahora equívoca identidad "democrática". Por supuesto dicho tránsito sólo puede enjuiciarse positivamente desde cualquier punto de vista; sin embargo, a pesar de su creciente compromiso con las formas y valores de la hasta entonces menospreciada democracia política, nunca se desarrolló un verdadero debate, una discusión a fondo, sobre las implicaciones políticas, ideológicas y programáticas de dicho compromiso. De esta manera, problemas tan decisivos como el sentido de la lucha electoral, el respeto de la legalidad, y sus consecuencias para la concepción misma de la política socialista, fueron soslayados o ignorados en tanto problemas, en nombre de un pragmatismo político entendido como exclusión de cualquier discusión de principios. La propia precipitación de las fusiones orgánicas, a su vez, promovió la idea de que el debate dividía y que, por ende, era preferible abandonar como doctrinarias todas las cuestiones sustantivas de un posible proyecto socialista para México.

En medio de una crisis internacional de las políticas socialistas y del hundimiento fragoroso de los modelos del sedicente "socialismo real", esta ausencia de debates y propuestas renovadoras, condujo a una creciente pérdida de influencia cultural de la izquierda políticamente organizada, esto es, a perder crédito en los espacios en los que anteriormente había sido un factor realmente importante. Por otro lado, la súbita

conversión democrática de muchos militantes "revolucionarios" determinó un curioso vaciamiento de las ideas propiamente socialistas en beneficio de un paradójico democratismo sin adjetivos (ni sustantivos). El fetiche revolucionario habría de ser sustituido, sin cambiar para nada la lógica del discurso, por el fetiche democrático. Si antes se esperaba la solución de todos los problemas de la revolución, ahora esta solución mágica caería del cielo de la democracia. Así, frente a las dificultades de una compleja y profunda crisis económica, la mayor parte de la izquierda mexicana se contentaría ya sea a transvertir sus expectativas milenaristas en fe democratista, ya sea a reiterar recetas keynesianas, estatistas, sin siquiera preguntarse sobre la viabilidad de las mismas.

No es por ende casual el declive lento pero sostenido de los resultados electorales primero del PSUM y después del PMS, a pesar de las expectativas despertadas por las fusiones orgánicas. En fin de cuentas, estas formaciones no sólo carecían de la identidad tradicional de las fuerzas de izquierda (por fortuna, cabría decir), sino que tampoco parecían ser capaces de construir una nueva identidad política. Absorbidas y hasta consumidas por luchas internas incomprensibles para los no iniciados, incapaces de oponer algo más que posturas reactivas, contestatarias, a las políticas oficiales, estas organizaciones no han reelaborado en términos democráticos un proyecto socialista, pero en cambio han desdibujado y hasta desechado la idea misma del socialismo como opción política válida para nuestro país.

En este contexto, la formación del PRD adquiere toda su ambivalencia. En un sentido podría implicar un enorme avance para la izquierda en la medida en que la pondría en situación de hacer una política con verdaderos horizontes nacionales, con raigambre en los mejores aspectos del nacionalismo revolucionario. Al proponerse la construcción de un verdadero partido político, con posibilidades de expresar y representar intereses y valores de franjas importantes de la población, las fuerzas de izquierda tendrían que obligarse igualmente a redefinir sus ideales y sus propuestas políticas, más allá de las simplezas hebertistas sobre el presunto miedo de la población hacia el término "socialismo". Empero, toda la evolución previa, junto con acontecimientos recientes, parecen indicar más bien la profundización de un pragmatismo mal entendido, de un antigobiernismo emocional, de un democratismo sin contenidos propositivos, y de un recetario que mira más a un pasado irrecuperable que a un futuro realmente posible.

De esta forma, después de esa enorme victoria que significó para la Corriente Democrática y sus aliados el resultado de los comicios de julio del 88, la dirección cardenista parece haberse dedicado denodadamente a despilfarrar su capital político. Con base en un improbable triunfo electoral -cuyo debate ha dejado más aburrimiento que certidumbre- se apostó a una improbable crisis de legitimidad e incluso de ingobernabilidad del sistema político, promoviendo un radicalismo antigobiernista que ha probado ser no sólo ingenuo sino también costoso. En efecto, los más bien fructíferos esfuerzos del gobierno actual por retomar la iniciativa política mediante golpes a los elementos más corruptos del sistema, han desplazado el interés de la opinión pública restringiendo notablemente la atención política hacia Cárdenas y su grupo. Estos por su parte, incapaces de reconocer la vertiginosa evolución de los acontecimientos, persisten en un estilo antigobiernista que incluso el PAN ha comenzado a criticar.

Pero la misma hipótesis de una crisis política irreversible parece haber motivado una urgencia irracional para construir un nuevo partido, el PRD, que entre otras consecuencias ha llevado a la destrucción irreflexiva del Frente Democrático Nacional (con la subsecuente confusión de los electores), así como a precipitaciones y virajes tácticos en el proceso de registro ante la Comisión Federal Electoral lo que, por supuesto, no ha dejado de ser aprovechado por las fuerzas priístas. Si a todo ello añadimos una

fuerte propensión a convertir todos y cada uno de los comicios en un nuevo "parteaguas", en un enfrentamiento final entre las fuerzas del bien y las del mal, así como a utilizar un lenguaje revolucionarista en que la democratización se identifica con una ominosa "toma del poder", no podemos sino reconocer que la constitución de ese polo electoral de centro-izquierda que parecían prometer las elecciones de 1988 se topa no sólo con resistencias externas, sino también con obstáculos provenientes del interior mismo del PRD.

A este respecto cabría recordar las siguientes palabras de Marx: "Donde quiera que existen partidos políticos, cada uno de ellos encuentra la razón de todo mal en el hecho de que no sea él, sino su contrincante, quien empuña el timón del Estado". Acaso la observación de Marx se sustentaba en una desconfianza excesiva en los mecanismos de la democracia representativa; pero hoy, frente a la mitificación de la misma por parte de algunos destacamentos de izquierda, tal vez no sea inconveniente retomarla en un nuevo sentido: vale decir, en el sentido de que, por importante que sea el sistema democrático, éste no va a resolver, por sí sólo, los problemas que aquejan a la sociedad mexicana.

En cualquier caso, es evidente la urgencia de un debate serio, así como un trabajo organizativo de largo aliento, para que el PRD logre convertirse en un verdadero partido político nacional. En medio de la incertidumbre generada por la desinformación en relación a los últimos procesos electorales, algo parece claro: que en Baja California este partido apenas existe y por ello fue incapaz de ya no digamos mantener la votación lograda por Cárdenas, sino ni siquiera establecer los elementos mínimos de una organización política creíble. Y en Michoacán, fortaleza histórica del cardenismo, más allá de las truculencias inacabables del priísmo, valdría la pena reconocer la debilidad orgánica de un partido y unos candidatos cuya fuerza política es apenas un pálido reflejo del carisma de su caudillo único.

El tránsito, pues, de este movimiento más reactivo que proactivo que ha sido el (neo)cardenismo a un partido político moderno se presenta lleno de dificultades y problemas. La izquierda tendría que reconocer que la desconfianza y el desinterés de los electores no fueron rotos por sus propuestas ni, mucho menos, por sus organizaciones, sino por una figura casi mítica. Que el presidencialismo popular tomó revancha contra la ausencia de un liderazgo presidencial sensible a las demandas más elementales de la población. Que el milagro cardenista se explica más por el descontento popular que por un proyecto político definido, y que, por ende, se basa en un capital político totalmente volátil. Que, en consecuencia, sacrificar sin ton ni son una herencia política e intelectual (socialista) que tantos años llevó construir, en beneficio de un pragmatismo oportunista y hasta cínico, puede conducir si no a la desaparición si al menos a un retroceso histórico que llevará décadas revertir. Y finalmente, que la construcción de un orden democrático no es, no puede ser, el resultado de un golpe de mano, ni siquiera de una insurrección "civil", sino un lento y complicado camino de reformas, rupturas pactadas y negociaciones interminables en el que el problema de conquistar y reconquistar la confianza efectiva de los ciudadanos exige principios sólidos, metas claras y capacidad de reconocer la verdad aunque no parezca conveniente: en pocas palabras, dignificación ética de la política.

5. La transformación de las fuerzas políticas actuales en un sistema de partidos efectivamente competitivo y efectivamente expresivo de la pluralidad social y económica del país se enfrenta, pues, a enormes dificultades. Por un lado, la cultura autoritaria y patrimonialista del priísmo, vinculada a un orden institucional en el que se funden y confunden organización partidaria, gobierno y Estado. Por otro, el predominio de la política negativa en los partidos de oposición, así como su muy desigual implantación nacional y su debilidad orgánica. Pero también tendría que asumirse, en el nivel de la sociedad civil, el peso de tradiciones, hábitos y valores producto años y años de dominio

autoritario y que se reflejan en los muy altos niveles de abstencionismo. Como tanto ha insistido Segovia, nuestra sociedad civil "realmente existente" mantiene estructuras y actitudes sumamente autoritarias que explican la permanente suborganización y subrepresentación de la inmensa mayoría de los mexicanos en todos los niveles sociales.

Por todo ello la transición democrática en México no puede sino ser difícil. Tanto más si consideramos que la cuestión de fondo no es, como ciertas corrientes afirman, ni la reducción del Estado en beneficio de (algunos sectores de) la sociedad civil, ni la estatización y sobre regulación pública de las esferas sociales, sino, por el contrario, la de la posible reconciliación democrática de estas dos dimensiones a través de un nuevo pacto nacional. De un pacto cuya formulación requiere de partidos modernos, democráticos hacia afuera y hacia adentro, capaces de establecer vínculos positivos con los sectores sociales más diversos y, sobre todo, responsables ante la nación en su conjunto. De un pacto que incluyendo la pluralidad irrenunciable de valores y políticas, permita establecer los límites del disenso y por ende los principios del consenso nacional indispensable.

Los inmensos rezagos económicos y sociales de nuestro país, los estragos provocados por la crisis actual, los enormes problemas causados por una política gubernamental muchas veces improvisada e irresponsable, las exigencias de una economía internacional cada día más competitiva, todo ello condiciona que en México la democracia posible y necesaria tenga que proponerse como democracia positiva, vale decir, como fortalecimiento y racionalización tanto de las instituciones públicas como de las organizaciones sociales. Por demasiado tiempo, el autoritarismo ha utilizado como coartada su presunta eficacia; la experiencia enseña claramente, sin embargo, que se trata frecuentemente de una eficacia perversa, de una eficacia negativa. Ello no obsta para reconocer que una democracia polarizada, entendida como mera posibilidad de oponerse y capitalizar los fracasos del adversario, las más de las veces conduce no sólo al desencanto sino también al surgimiento y a la legitimación de nuevas formas de autoritarismo. No basta decir, entonces, que se quiere la democracia; es indispensable decir también para qué se quiere la democracia.

Julio de 1989

CITAS:

[*] Profesor del Departamento de Sociología de la UAM-A e investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Autor del libro *Marxismo y filosofía: un horizonte polémico*. Colaborador de *Cuadernos de Nexos* y miembro del Consejo Editorial de *El Cotidiano*.